

EstePaís

TENDENCIAS Y OPINIONES

Naturaleza posible: seis testimonios



Diciembre de 2014 Número 284
Revista mensual
ISSN: 0188-5405
www.estepais.com
0 0 2 8 4
7 5 2 4 3 5 1 4 6 0 2 3 1 1

Valer Austin, Julia Carabias, Exequiel Ezcurra, Sandy Lanham, Javier de la Maza, Adriana Navarro, Patricio Robles Gil, Jaime Rojo

EstePaís|cultura
Carlos Pellicer López,
Eduardo Langagne,
Fernando Fernández

La construcción de una esperanza

Exequiel Ezcurra

Vivimos tiempos difíciles y angustiantes. Mientras la violencia se enseñoa en México, muchos nos preguntamos qué caso tiene preocuparse por el futuro del ambiente cuando el horror inmediato se asoma cotidianamente a la puerta de nuestra casa. Por qué esforzarse por labrar un porvenir en armonía con el mundo natural cuando el presente se ve tan desoladoramente carente de esperanza. Por qué preocuparse por plantas o animales amenazados de extinción cuando dece-

nas de miles de jóvenes mueren cada año en una espiral de violencia que parece cada vez más demencial. Por qué preocuparse por la conservación de especies silvestres cuando muchas personas son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, migrantes o estudiantes.

Los mexicanos estamos angustiados. Sentimos que es necesario hacer algo ya, pronto, porque en esta desesperanza se nos va el país.

Quiero arrojar dos ideas, dos hipótesis. La primera es que estamos confrontando un conflicto civilizatorio mayor, una

EXEQUIEL EZCURRA es director del Instituto para México y los Estados Unidos de la Universidad de California, y profesor de ecología en la misma universidad. Ha recibido importantes distinciones internacionales por su trabajo como investigador, divulgador y documentalista científico.

© Patricio Robles Gil



disyunción profunda entre una visión de ganancias privadas a corto plazo como motor central del desarrollo, sin importar el impacto sobre el patrimonio social en el largo plazo, y una visión de beneficios públicos en el largo plazo, que no sacrificó la viabilidad futura de toda la sociedad a cambio de beneficios privados inmediatos. La segunda hipótesis es que la sustentabilidad ambiental y la crisis social son facetas de un mismo conflicto.

Pensemos primero en el pasado. El territorio de lo que es actualmente México ha transitado por ciclos repetidos de civilización y colapso. Teotihuacán se derrumbó en menos de un siglo (entre los años 600 y 700 d. C.) a consecuencia del mal uso de sus recursos naturales. Donde, según el clima, debía haber encinos y pinos, los españoles a su llegada encontraron un territorio baldío y degradado. Sabemos, por los arqueólogos, que el abandono no fue pasivo: guerras por la apropiación de recursos foráneos y el violento avasallamiento de pueblos vecinos precedieron el colapso. Procesos similares acompañaron el derrumbe de las grandes metrópolis mayas y la multitud de civilizaciones del Clásico mesoamericano. Fue el tributo guerrero, expresión última de la insustentabilidad de los aztecas, lo que permitió la alianza de Cortés con los tlaxcaltecas y la caída trágica de Tenochtitlan.

La historia de depredación ambiental y violencia social siguió durante la Colonia y la Independencia. Primero, con la esclavización de los pueblos indígenas para la explotación minera y los trabajos forzados: la construcción del Tajo de

Nochistongo, una obra demencial creada por el virreinato para destruir la naturaleza lacustre de la cuenca de México y tratar de convertirla en un mal remedo de la meseta Castellana, costó —solo ella— 30,000 vidas. Después, el sistema de grandes concesiones de tierras, que llevó a sangrientos conflictos territoriales, como la guerra de Castas contra los mayas independientes o la guerra contra los yaquis, y finalizó con la revolución Mexicana, un gran alzamiento contra la inmensa injusticia de las haciendas porfiristas.

La llegada del siglo xx no acabó con esa larga historia de depredación social y destrucción de nuestros recursos naturales. A pesar de algunos atisbos esperanzadores, de algunas llamadas de sensatez, de algunos líderes sensibles, el trasfondo a lo largo de los últimos 100 años ha sido la aceptación de los privilegios de unos pocos por sobre los derechos de las mayorías. La tragedia de la tala de las selvas durante las décadas de 1960 y 1970 es un ejemplo claro de cómo los intereses de la industria agroalimentaria podían impulsar la destrucción del trópico mexicano a favor de una supuesta modernidad en la que no tenían cabida las comunidades campesinas que habían sabido cuidar de sus bosques por siglos. Para darle legalidad al despojo, fue creada una Comisión Nacional de Desmontes, cuyo rol era promover la destrucción de la naturaleza como meta estratégica de la nación.

A pesar de haberse incorporado el discurso ambiental a la gestión

© Jaime Rojo



pública con la creación de una Secretaría de Medio Ambiente, el progreso ha sido lento. La explosión en 1984 de la planta de gas de San Juan Ixhuatepec en la Ciudad de México dejó un saldo de 600 muertos y 2,000 heridos. Nunca se había considerado el riesgo de tener una instalación industrial de alta peligrosidad en medio de una zona socialmente marginada y densamente poblada. Sobre declaraciones y promesas de que algo así jamás volvería a ocurrir, siete años más tarde, en 1991, un incendio en la formuladora de plaguicidas Anaversa en Córdoba, Veracruz, generó uno de los accidentes industriales más graves de México, con escurrimiento de



© Patricio Robles Gil

pesticidas a los principales ríos de la región y más de 1,500 muertes posteriores a causa de la contaminación resultante.

Los eventos climáticos extremos impactan siempre a los sectores más desprotegidos y vulnerables. En 1995 el huracán Paulina arrasó con las precarias edificaciones en laderas y barrancas de Acapulco, dejando un saldo de 400 personas muertas y 300,000 personas sin hogar. La Comisión Nacional del Agua desarrolló en ese entonces un estudio donde anunció que una tragedia de esa magnitud no se volvería a repetir en 1,000 años. Sin embargo, volvió a ocurrir 18 años después: el 14 de septiembre de 2013 el Huracán Manuel azotó a Acapulco con consecuencias trágicamente similares. Dos semanas después, el 30 de septiembre de 2013, el secretario de Medio Ambiente escribió que “la frecuencia e intensidad de los desastres naturales [...] exigen de todas las naciones y la sociedad en su conjunto un cambio de actuación que incremente nuestra seguridad y capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del planeta”.¹

La amarga verdad, sin embargo, es que las consideraciones de riesgo ambiental para la sociedad civil no han pesado tanto sobre las decisiones de gobierno como lo han hecho los inte-

res económicos: en septiembre de 2014, un grave incidente de derrame de residuos mineros de cobre sobre el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, puso nuevamente en evidencia la fragilidad de muchos de nuestros desarrollos urbano-industriales y la vulnerabilidad de los más pobres. Se produjo una tragedia ambiental cuyas consecuencias apenas empezamos a vislumbrar, ocasionada por la ausencia de un proceso de manejo riguroso de residuos mineros en condiciones de elevado riesgo ambiental, y exacerbada por las intensas lluvias que trajo el huracán Odile al noroeste de México. La cuenca entera del río Sonora, fuente de vida para el norte del estado,

se encuentra ahora irreversiblemente dañada, y el daño pone en peligro el futuro de la población en una región donde los conflictos por el agua están ya causando inmensos antagonismos sociales.

A pesar de esta desgarradora evidencia, el Gobierno federal decidió de todas maneras autorizar el proyecto minero de Los Cardones, en Baja California Sur, que planea extraer oro, en la cabecera de la cuenca que abastece a la ciudad de La Paz, tratando la roca con cianuro: toneladas de cianuro, suficientes para matar a toda la población de México. Los habitantes de la Paz miran ahora con angustia hacia la sierra, su fuente de agua y vida, y se preguntan qué pasará en el futuro cuando entre nuevamente un huracán de gran intensidad en la península y descargue su fuerza sobre las presas llenas de cianuro. Las autoridades ambientales nos

dicen a los ciudadanos, una vez más, que el riesgo en estas nuevas autorizaciones está analizado y calculado, y que una tragedia como la de Buenavista del Cobre en Sonora jamás volverá a ocurrir en México. Lo cierto, sin embargo, es que el análisis de impacto y riesgo en nuestra legislación ambiental es terriblemente deficiente y permite que se autoricen proyectos sin las condiciones mínimas de control que el peligro inherente a algunas actividades demanda. Comunidades, pueblos y ciudades viven bajo la aterradora espada de Damocles de la discrecionalidad de la autoridad ambiental y de un sistema de toma de decisiones opaco y soberbio que no sabe rendir cuentas a la sociedad.

Las decisiones de gobierno en materia ambiental están enmarcadas en la creencia ciega, jamás demostrada, de que las ganancias privadas a corto plazo son un impulsor vital de la riqueza de la nación y que algo debe sacrificarse del capital natural y de la viabilidad futura del país en aras de un supuesto desarrollo económico. Sobre la base de una ley ambiental débil y confusa, los permisos se otorgan en nombre del progreso, ignorando las preocupaciones y los reclamos de la sociedad civil, y la impunidad reina cuando las catástrofes ambientales ocurren.

Los que pagan al final las consecuencias son siempre los sectores sociales más vulnerables y los recursos naturales más frágiles y más accesibles a la depredación. Así hemos perdido el 90% de nuestras selvas originales y los grandes lagos del altiplano, junto con buena parte de los manglares que protegen nuestras costas y la mayor parte de nuestros acuíferos. No tenemos conciencia de ello, pero nuestros migrantes a Estados Unidos son impulsados, en buena medida, por el deterioro ambiental. Con una población empobrecida, sin bosques y sin agua, vemos la violencia y la depredación crecer y nos preguntamos qué hacer.

Como sociedad, como país, necesitamos razones para construir una esperanza. Necesitamos experiencias que nos abran las puertas de un futuro viable. La crisis ambiental se creó lentamente; en algunos casos, tiene siglos de crecer poco a poco entre nosotros. Por muchos años la hemos ignorado, sin darnos cuenta de que es otra faceta de la desigualdad social y de la impunidad frente a la depredación. Revertir esta crisis nos llevará también muchos años. Debemos regenerar nuestro tejido social, repensar el sistema educativo, dar oportunidades a los que no las tienen, y esperanza a todos los que sienten la misma angustia por el futuro.

México está lleno de experiencias conmovedoras, lleno de comunidades que han decidido apropiarse de su destino y buscar un futuro mejor, tanto en lo social como en lo ambiental. Los pescadores de Cabo Pulmo, por ejemplo, que supieron reinventarse como una comunidad conservacionista y oponerse al desarrollo depredador de su costa y sus arrecifes. O los ejidatarios de San Juan Nuevo, en Michoacán, que han sabido crecer económicamente mientras sus bosques crecen con ellos. O los habitantes de Saltillo, Coahuila, que voluntariamente pagan en su recibo de agua el costo de la conservación de la Sierra de Zapalinamé y sus manantiales. O las cooperativas pesqueras del Pacífico norte, defensoras acérrimas de sus recursos marinos y de su autonomía en el único sector desde Alaska hasta El

Cabo donde se sigue pescando sustentablemente langosta y abulón. O los coras y los huicholes que defienden la cuenca del río San Pedro, el único río del Pacífico que todavía desciende libre hasta el mar y alimenta los manglares de Marismas Nacionales, el humedal más importante y más productivo del Pacífico mexicano.

Podría seguir llenando páginas con experiencias similares, todas igualmente hondas y estremecedoras. ¿Qué lleva a

Quisiera cerrar con la hipótesis con la que inicié: lo ambiental y lo social son caras de un mismo dilema. No habrá futuro viable sin un ambiente saludable, pero tampoco lo habrá sin un respeto por los derechos de las personas que cuidan esas aguas, esas tierras, esos bosques, y viven de ellos. La modernidad no es un asunto de consumo exacerbado y ganancias de corto plazo; es una pregunta profunda de quiénes somos, cómo convivimos, a



© Jaime Rojo

un pescador de almejas a acariciar una ballena y a partir de allí cambiar el destino de su comunidad? ¿Qué fuerza impulsa al habitante de un río a decidirse a protegerlo de la minería tóxica o de las industrias contaminantes? ¿Qué conciencia profunda lleva a los habitantes de una ciudad, como tantas otras, a proteger sus sierras, sus bosques, sus manantiales?

Creo que tiene que ver con el “sentido de lugar”, esa sensación de pertenencia a una comarca, un grupo social, un paisaje, incluso una añoranza. Es la capacidad que tienen algunas personas de pensar en el bien público y en el futuro de su comunidad, de su sociedad, como elementos centrales de decisión y de vida. Es la capacidad de sacrificar beneficios individuales inmediatos a favor de una visión de beneficios públicos en el largo plazo.

quién nos debemos y cómo imaginamos nuestro propio futuro.

Nuestro desafío generacional es construir un porvenir de justicia y compasión, de respeto hacia la otredad y la diversidad cultural. Pero también es construir un futuro en el que tenga cabida la inmensa riqueza del mundo natural, el heterogéneo, riquísimo caudal de vida del cual provenimos. Proteger nuestros bosques, nuestros mares, nuestras costas, nuestros ríos, es también parte de la construcción de una esperanza. **EstePaís**

¹ Juan José Guerra Abud, “Cambio climático”, en *Reforma*, 30 de septiembre de 2013, visto en <<http://gruporeforma.reforma.com/aplicacionescom/OpinionElecciones/nota/default.aspx?Folio=1509565&Idcol=1066&plazaconsulta=reforma&impresion=0>>, página consultada en noviembre de 2014.